



# Las disputas por la justicia cultural: otro aspecto presente en el paro nacional

Yusmidia Solano Suárez

Investigadora social, feminista afroindígena.

Doctora en Estudios de Mujeres y Género.

Integrante de la Red de Mujeres del Caribe y la Colectiva Feminista Emancipatoria.

Profesora de la Universidad Nacional de Colombia Sede La Paz.

10 de mayo de 2021

Al momento de escribir estas notas, la escalada de violencia armada contra el Paro que se adelanta en Colombia desde el 28 de abril de 2021 ha cambiado de modalidad: las supuestas personas de bien, vestidas con camisetas blancas, han realizado retenciones y bloqueos en las salidas de Cali y han disparado contra la Guardia Indígena dejando 8 integrantes de esta heridos, entre ellos a Daniela Soto, perteneciente a la comunidad Nasa, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca e integrante de la Agenda de Paz Joven de ese departamento. La primera evidencia de esta estrategia fue el atentado que se realizó contra Lucas Villa en Pereira desde un carro particular y que hoy lo mantiene al borde de la muerte<sup>1</sup>.

Es grave la situación. Es el signo de lo que puede empezar a generalizarse no solo en Cali sino en otras ciudades del país: un enfrentamiento entre manifestantes desarmados del Paro y de personas organizadas y armadas que se atribuyen ser la “gente de bien”, noción en la que no incluyen por supuesto a lxs indígenas ni a los participantes del paro. Es esclarecedora esta postura, porque refleja lo que han

sido 529 años de sometimiento a los pueblos originarios en toda Abya Yala (América) y en este caso los de Colombia: la de no considerarlos personas con derechos, muchos menos interlocutores válidos con quienes discutir el devenir de este país.

En este comportamiento se reflejan disputas históricas por el significado, valoración y derechos de los pueblos indígenas, pero también de los afros, jóvenes, mujeres y todxs quienes conformamos el pueblo, las “otras” y los “otros” quienes no hemos sido suficientemente reconocidos y representados en la conformación de la nación. En un tweet de Omar Yepes Alzate<sup>2</sup> del 9 de mayo, advierte: “Mucha atención a las organizaciones indígenas que salen de su hábitat natural a perturbar la vida ciudadana. Cali y Popayán son muestra de ello. Las autoridades están en el deber de actuar y evitar que la situación pase a mayores por la reacción que se puede venir por inacción” (@omaryepesalzat). Si prestamos atención a la última frase, no es solo una advertencia, también hay una amenaza que ni siquiera es velada, sino francamente explícita.

Según el señor Yepes Alzate, las organizaciones indígenas tienen un **hábitat natural**, del cual no deberían salir porque perturban la vida ciudadana. Se concibe así, que los indígenas deberían tratarse como a los animales (a los cuales también se les violenta) que solo pueden estar en las reservas que se

<sup>1</sup> Antes y después de empezar a ejercer esta modalidad, los asesinatos, desapariciones, maltratos físicos y psicológicos, violaciones de mujeres y arbitrariedades contra las personas que participan del paro e incluso contra las que no, fueron hechos directamente por la policía, especialmente por el Escuadrón Móvil antidisturbios de esa institución, cuya sigla es ESMAD, cuyo desmonte es ahora un punto central para empezar las negociaciones que lleven al levantamiento del paro.

<sup>2</sup> Es el actual presidente del Partido Conservador Colombiano.

han construido para ellos, en este caso, los resguardos indígenas y que no tienen derecho a participar y decidir en los acontecimientos que interesan al país, ellos se deben solo a los espacios donde se les ha confinado históricamente.

Se les ha confinado, primero por los invasores europeos y para nuestro caso, por los colonizadores españoles, quienes despojaron a los pueblos originarios de sus territorios, que eran todos los espacios que ocupaban en la fundación de ciudades, al tiempo que los recluían en unos “pueblos de indios”, donde debían vivir bajo la autoridad de caciques controlados por España. Posteriormente, cuando se conformó la República de Colombia, se continuó e incluso se dividió y disminuyó el área de los resguardos indígenas como forma de seguir expropiándoles los escasos territorios que les habían dejado. Actualmente el despojo sigue y cada vez más el gobierno entrega licencias para megaproyectos en territorios de los resguardos sin consulta previa.

Esa es la primera de las expropiaciones, pero hay muchas más que se han venido haciendo: No reconocerles el derecho a ser parte de la nación con su propia cultura, costumbres, lenguas y visión del mundo; despojarlos del carácter de ciudadanos con todos los derechos incluido el de participar en las soluciones de las grandes problemáticas del país. En la colonia se discutió incluso si tenían almas (también lo hicieron respecto a todas las mujeres).

Ahora, una cierta élite que se considera descendiente de europeos, que se ha entronizado en el poder a sangre y fuego, cuestiona la posibilidad de que los indígenas contribuyan a garantizar las salidas pacíficas al paro con la acción de la Guardia Indígena, que tantas lecciones de ecuanimidad, paciencia, valentía y criterio nos ha demostrado en medio de la guerra que nos ha tocado vivir en los últimos 60 años.

Por eso en el Paro Nacional no están en juego solo las reivindicaciones materiales, que contrarrestarían

las injusticias socioeconómicas, sino el hecho mismo de nuestro derecho a existir como pueblos con otras culturas, sabidurías, con dignidad y derechos en esta Colombia que nos pertenece a todxs. Está en juego la justicia cultural que habla de reconocer y representar adecuadamente la diversidad del pueblo colombiano en todos los asuntos del país.

Está en juego la visión de convivencia y cuidado de la naturaleza, que se afianza en la solución pacífica de los conflictos, frente a la visión extractivista, que ve a la tierra, los mares, los ríos, la flora y la fauna como recursos para explotar y la guerra y la militarización como medios para seguirse apoderado de este país.

En esta disputa de sentidos, la primera visión está representada principalmente por los pueblos indígenas, afros y población rural, pero como nos lo está mostrando este paro, también por la población urbana, principalmente jóvenes, mujeres, hombres y personas de sexualidades e identidades no binarias que no están dispuestxs a permitir que se les siga manteniendo al margen de una vida digna y buscan reconocimiento y representación en las decisiones y acciones que la permitan.

La segunda visión está representada por las elites económicas y políticas del país y en el actual gobierno, que hasta el momento no ha dado señales de propiciar una ampliación de los espacios, mecanismos y recursos que lleven a una salida democrática del paro, lo cual para desgracia de todxs, nos está conduciendo a niveles de crueldad y violencia militar y civil urbana contra gente desarmadas nunca vistas. La continuidad de la movilización popular pacífica y masiva, la creatividad e imaginación social para buscar alternativas y la solidaridad internacionalista con estas, son nuestra esperanza de encontrar salidas negociadas a la actual crisis de todos los órdenes en Colombia.